

**PALABRAS DEL HONORABLE PROCURADOR
GENERAL DE LA REPÚBLICA, DR. RADHAMES
JIMÉNEZ PEÑA, EN OCASIÓN DE LA VII
REUNIÓN DE JEFES DE DELEGACIÓN DE LA
REUNIÓN DE MINISTROS DE JUSTICIA DE LAS
AMÉRICAS, REMJA: TENDENCIAS
HEMISFÉRICAS SOBRE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL**

Hoy en día, el tema de la cooperación internacional ha dejado de ser una cuestión meramente burocrática para convertirse en uno de los elementos más esenciales para la discusión y enfrentamiento de los diferentes problemas que presentan nuestras sociedades. Como es sabido, el flagelo del crimen organizado en sus diferentes vertientes, siendo uno de los principales causantes del atraso y subdesarrollo de la región, ha venido transformándose en la misma medida en que hemos ido evolucionando como sociedad, o quizás hasta en mayor grado.

Por esta razón, y dadas las características actuales de los fenómenos delictivos, donde los grupos delincuenciales se caracterizan por las altas posibilidades de insertarse, tanto en la esfera legal como ilegal, dentro de las actividades políticas y económicas de los Estados, muchas veces resultando desbordantes sus consecuencias fatales, es que necesitamos afianzar aún más los lazos de reciprocidad en materia de cooperación internacional.

El incremento del crimen organizado, con sus altos niveles de corrupción, es hoy un fenómeno sumamente sofisticado. El tráfico de armas y municiones, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de órganos humanos, lavado de activos, etc., son actividades muy lucrativas y con estructuras muy complejas, además de tener fuertes ramificaciones, tanto de carácter interno como externo, al punto de ser consideradas como industrias del crimen. Si bien es cierto que combatir dichos fenómenos no es tarea fácil, no es menos cierto que si no contamos con mecanismos de cooperación ágiles y eficientes, bajo el entendido de que el crimen organizado no respeta fronteras, es poco lo que podremos lograr.

Además, la gran concentración de recursos le otorga un inmenso poder económico y político en constante crecimiento a la criminalidad organizada, situación que aumenta considerablemente la capacidad de obviar el sistema penal, quedando muchos de estos delitos impunes. Debemos tomar en cuenta que una de las áreas más afectadas por este flagelo es precisamente la administración pública del Estado, principalmente en cuanto a la adjudicación de bienes y contratos públicos, dejando al Estado en una situación de desigualdad con relación a la capacidad de accionar frente a estas irregularidades, ya que mientras mayor es la influencia de las organizaciones criminales, menor es la capacidad del sistema penal para investigar y acusar.

De esta manera, el panorama actual sobre el fenómeno delincuencia, nos muestra que la actividad criminal organizada tiene mayores repercusiones a nivel internacional, con enormes conexiones o “multinacionales del delito” en la mayoría de los países y con gran poder de influencia y manipulación.

En ese sentido, los esfuerzos de cooperación deben ir dirigidos hacia el fortalecimiento de la capacidad de respuesta de cada uno de los Estados, tanto a nivel interno como a nivel internacional, para lo cual es esencial el establecimiento de mecanismos adecuados para ello. Desde el punto de vista jurídico, dicha capacidad puede fortalecerse a través de la creación de instrumentos jurídicamente vinculantes para los Estados, como es el caso de los tratados o convenciones, o a través de la creación de mejores mecanismos que permitan el cumplimiento de lo establecido en los instrumentos ya incorporados al ordenamiento interno.

En ese mismo orden, también es necesario reconocer nuestras deficiencias a nivel investigativo, no sólo en cuanto a recursos, sino en cuanto a técnicas que permitan actuar de manera más eficiente. Algunos modelos eficientes de cooperación a tomar en cuenta en materia delictiva son, por ejemplo, el *Sistema de Información de Schengen*, el cual es una compleja base de datos que permite que las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales puedan intercambiar información acerca de personas sobre las que pesan órdenes de captura o de extradición, así como la creación del Europol, uno de los

Abened

principales avances registrados en los últimos años en materia de cooperación entre las fuerzas del orden, órgano perteneciente a la Unión Europea e integrado por agentes policiales y aduaneros, y el Eurojust, estructura central de coordinación cuya finalidad es permitir que funcionarios de la policía judicial y fiscales puedan colaborar en la investigación de delitos que afecten a países de la región, el cual ha implementado con éxito lo que es la *orden de detención europea*, en vigor desde enero de 2004, con el objetivo de poner fin a los lentos procesos de extradición, a través de un mecanismo de solicitud directa.

Sin lugar a dudas que, del carácter transfronterizo de la delincuencia organizada, resulta necesaria la implementación progresiva de políticas penales comunes a los Estados de la región, puesto que uno de los mejores y más eficientes métodos para enfrentar la problemática, es el que se construye a través de mecanismos de cooperación con otros países.

En el caso particular de la República Dominicana, nos hemos comprometido a mejorar significativamente los mecanismos de investigación en materia criminal, así como a crear aquellas estructuras que permitan un trabajo interdisciplinario, a través del fortalecimiento de los equipos especializados de investigación, con miras a generar conocimientos intercambiables de la actividad criminal organizada.

Asimismo, es para nosotros prioridad fortalecer los mecanismos de asistencia a víctimas y testigos dentro del proceso penal, de tal forma que su colaboración facilite, sin mayores traumas, la obtención de información valiosa sobre los hechos delictivos, por lo que la conformación de equipos de investigación en ese sentido con entidades policiales internacionales es también una necesidad importante. Debe ser un compromiso real el de dar un gran giro con relación a los procesos de investigación y persecución penal en la región, enfrentando de una vez por todas, de manera conjunta, el fenómeno de la macro criminalidad, el cual ha sido relegado por haber concentrado los esfuerzos en el combate de la micro criminalidad, que, como todos sabemos, deja de lado los grupos jerárquicos del crimen organizado.

Estoy convencido, sin embargo, de que muchos han sido los avances logrados en la materia, los cuales han sido posibles gracias al reconocimiento de la necesidad de que nuestro sistema jurídico sea verdaderamente un sistema garante de los derechos fundamentales, que contribuya al fortalecimiento del Estado de Derecho y que facilite el acceso a la justicia. Por ejemplo, hemos tenido importantes logros en materia de lavado de activos, con la creación de los órganos especializados en inteligencia financiera, y precisamente acabamos de concertar diversos convenios con instituciones estatales para reforzar la lucha contra esta manifestación de la criminalidad organizada, e impulsar un plan estratégico de investigación a nivel nacional en la materia.

No obstante, aún precisamos de la creación de aquellas instancias necesarias para la aplicación de convenios de cooperación internacional en temas de lavado, además de lineamientos concretos de actuación en cuanto a la recuperación de activos.

Es oportuno resaltar que cada vez más nos estamos esforzando en el combate del crimen organizado, con la firme intención de fortalecer los lazos de cooperación hemisféricos que nos permitan superar estas debilidades, ya que entendemos que la concreción de alianzas en términos de cooperación judicial, se traduce en una región mucho más segura, estable y democrática.

Sin embargo, dichos objetivos sólo serán concretizados en la medida en que asumamos el compromiso de aunar esfuerzos con miras a combatir el crimen organizado a través de un abordaje regional.

En ese orden, la República Dominicana cuenta con un Proyecto de Ley Antiterrorismo, y con una de las legislaciones más completas en materia de Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, armonizada con lo estipulado en los Protocolos de la Convención de Palermo del año 2000. Hemos ratificado, asimismo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, debiendo señalar la relevancia que tuvo éste tema en la pasada Reunión de Ministros de Justicia o Procuradores

Generales de las Américas, celebrada en la República Dominicana, concertando posiciones muy valiosas al respecto, como la de la necesidad de seguir avanzando en el proceso de elaboración del Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional, instando a los demás Estados a concluir las negociaciones en relación al mismo para ser enviado a la próxima Asamblea General de la OEA, de conformidad con las resoluciones AG/RES.2026 y AG/RES.2116, con miras a su aprobación e implementación.

En ese orden de ideas, y sin menosprecio de lo anterior, entendemos que nuestros esfuerzos deben ir dirigidos más allá de la aprobación o ratificación de Convenios; nuestro objetivo primordial debe ser el de esbozar políticas comunes que persigan de manera eficiente las diferentes problemáticas regionales que amenazan la seguridad y estabilidad de nuestros países.

De ahí que debemos enfocarnos en el fortalecimiento de la cooperación judicial y asistencia mutua entre los Estados de la región, lo cual a su vez nos garantiza un mayor fortalecimiento de la democracia regional y unos sistemas de justicia menos corrompibles, siendo la rendición de cuentas instrumento fundamental para medir los avances obtenidos.

Finalmente, no debemos dejar de lado el fenómeno de la corrupción, el cual, a su vez, ha ido permeando hasta las más recónditas instancias de nuestros sistemas, en detrimento de todos los avances que hayamos podido lograr, por lo que debemos concentrar nuestra atención también en el tema de cooperación en materia anticorrupción. La Asamblea General de la OEA de 2004, realizada en Ecuador, declaró que la corrupción “atenta contra la democracia y la gobernabilidad democrática, debilita las instituciones, compromete el desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza, mina la confianza ciudadana y afecta la estabilidad política”.

Visto así, debemos perseguir el fortalecimiento de los regímenes legales en materia de extradición por actos de corrupción y en materia de confiscación de activos, así como promover medidas legislativas comunes para la repatriación de activos apropiados de manera fraudulenta.

Ésta ardua lucha contra la delincuencia organizada, y sus nefastas consecuencias, es un aspecto fundamental para el desarrollo democrático y para la consolidación de la institucionalidad de nuestra región, por lo que reiteramos nuestro compromiso en __fortalecer los lazos de cooperación en la investigación y procesamiento de actos delictivos, en todos sus ámbitos. De tal forma, les exhortamos a los demás Estados a mantener la reciprocidad en términos de cooperación internacional, bajo el entendido de que con la sola colaboración de un determinado país sin el apoyo de los demás, difícilmente podamos obtener resultados tangibles.

Consciente de la situación, y visto el panorama de nuestra realidad hemisférica, reafirmamos nuestro compromiso ante esta 7ma. Reunión de Jefes de Delegación de la Reunión de Ministros o Procuradores de Justicia de las Américas, Remja, de seguir aportando todo lo necesario para defender estos foros tan importantes y eficaces para la promoción de la confianza, diálogo y cooperación regional, en cuanto a la formulación de políticas en materia de justicia penal y de respuestas para hacer frente a las nuevas amenazas a la seguridad, mejorando así sustancialmente los procesos de investigación con énfasis en la prevención, persecución y juzgamiento del crimen transnacional globalizado.

Muchas Gracias.